



Proceso	Verbal -R.C.E.-
Demandante	Dora Inés Gómez Cano y O.
Demandado	Nueva EPS y O.
Radicado	05001 31 03 013 2022 00257 01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 13 Civil del Circuito de Medellín
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 093
Decisión	Confirma
Tema	Oportunidades probatorias. Las partes deben aportar al proceso las pruebas que pueden obtener directamente. Carga dinámica de la prueba

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.) diecinueve de julio de dos mil veintitrés

**I. OBJETO**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 6 de febrero de este año, que decretó pruebas en este proceso verbal instaurado por DORA INES GOMEZ y otros en contra de la NEVA EPS y otros.

## II. ANTECEDENTES

Por auto del 6 de febrero último, el **JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**, decretó las pruebas solicitadas por las partes y negó la de informe solicitada por la parte demandante, consistente en oficiar a la Nueva EPS S.A. y a la IPS Colombia Saludable, para suministrar la información indicada.

Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación argumentando que está en desacuerdo con la negación de la siguiente prueba:

*"Se niega la solicitud para oficiar a la Nueva EPS S.A. y a la IPS Colombia Saludable para que aporten los requerimientos de sobretasa y reajuste que le hubiera realizado la IPS a la EPS señalada, respecto al servicio asistencial de hospitalización en casa, dado que la parte no cumplió con la carga procesal prevista en los artículos 78.10 y 173 del Código General del Proceso".*

Como soporte argumenta que en este caso el ejercicio del derecho de petición para la consecución de la información solicitada (requerimientos, sobretasas, y ajustes solicitados por la IPS COLOMBIA SALUDABLE) hubiera sido inocuo por la reserva legal de la información, pues contiene información sensible y financiera de la entidad y no la hubiera entregado; precisa que el afiliado no tiene la posibilidad de contar con la misma porque es una información y unos trámites que son

propios de las entidades; esto es, el prestador y la EPS, la que se hubiera podido obtener mediante el oficio solicitado; también pone de presente que con soporte en el art. 167 del C. General del Proceso, se puede distribuir la carga de la prueba, lo que puede hacer a petición de parte o de oficio en cualquier estado del proceso antes de proferir sentencia. La información la considera de vital importancia para el proceso para determinar si los servicios ordenados no fueron prestados por el sobre costo o porque no hubo un acuerdo entre el prestador y el asegurador, pues precisamente ello fue el motivo de la no prestación del servicio de medicina en casa (domiciliaria) por los costos adicionales que no fueron cubiertos por el asegurador, pues el paciente no volvió a recibir la atención en casa por problemas administrativos entre los demandados por los costos de los servicios, reitera que por estas razones la información no está en manos de la demandante, sino, de la parte en cuya virtud de la distribución de la carga de la prueba debió ser oficiada en ese sentido, para determinar si el prestador efectivamente antes de que dejara la prestación de los servicios de medicina al paciente en casa, requirió el pago de la sobretasa (archivo 019).

Para resolver el recurso de reposición trajo a partes de la sentencia de Constitucionalidad C-099 de 2022, sobre la carga que el art. 173 del C. General del Proceso, impone a las partes para que directamente aporten la información con destino al proceso que puedan obtener directamente o mediante el ejercicio del derecho de petición, indicando que el recurrente no acreditó que hubiera solicitado la información y ésta hubiera sido negada, en cuyo caso, el juez si estaría

compelido a solicitarla, tampoco acogió el argumento de que la información este sometida a reserva o sea información sensible sobre situaciones financieras; incluso, puntualizó: *“Tanto las IPS como las EPS tienen la obligación legal de reportar sus estados financieros (Ley 1966 de 2019, numeral 12 del artículo 22 del Decreto 1080 de 2021), careciendo por tanto dicha información de reserva legal .... o información sensible para la entidad”*.

En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, advierte que no se cumple con los presupuestos para su inversión, por cuanto no se advierte la dificultad probatoria para los demandantes, como tampoco la probaron. Con este soporte negó el recurso de reposición y concedió el de apelación en el efecto devolutivo ante el superior (archivo 21).

### **III. CONSIDERACIONES**

El art. 173 del C. General del Proceso establece: ***“Oportunidades probatorias.*** *Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en ese código.*

*“En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición, hubiere podido conseguir la parte que las solicita, salvo cuando la*

*petición no hubiere sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.*

Entre las novedades que trajo el Código General del Proceso, estableció que las partes deben aportar directamente al proceso, dentro de las oportunidades probatorias, las pruebas que puedan obtener directamente o mediante el derecho de petición; en caso de que la petición formulada no sea atendida por el destinatario, el interesado en la prueba debe acreditar esta circunstancia sumariamente y en este caso, si puede obtener esa prueba con la mediación del juez.

Es evidente la finalidad practica de la carga que se impuso a las partes, para no recargar toda la actividad del proceso, en especial la probatoria, en cabeza del juez, lo que implica que esas pruebas de antemano obran en el proceso y permiten una mejor visión del proceso, lo que es beneficioso y redundante en garantías para las partes y para el juez, quienes de antemano cuentan con elementos persuasivos, lo que les permite una mejor visión en aras de la conciliación del litigio; o incluso, para de antemano tener por probados hechos fundamento de las pretensiones, incluso proferir sentencia anticipada, lo que permite disminuir la actividad del proceso, como la probatoria, con eventuales ventajas para la administración de justicia.

En este caso, el recurrente afirma que no era posible la obtención de la información por estar sujeta a reserva legal y por ser sensible porque tiene que ver con la parte financiera, lo que no es cierto, como atinadamente lo coligió la primera instancia con soporte legal; con todo, la parte demandante

pudo haber elevado el derecho de petición para obtener la información requerida y si en este caso, los demandados hubieran respondido que no la suministraban por las razones invocadas para recurrir la decisión o por cualquier otra circunstancia, le quedaba abierta la posibilidad para pedir al juez que oficiara a las demandadas para obtener esa prueba o quizás mediante la exhibición de documentos.

En verdad no se puede acudir al facilismo que existió en el pasado, solicitando al juez la recolección de todas las pruebas durante la fase probatoria del proceso y que cada parte consideraba indispensable para su éxito; pues como viene de indicarse, el Código General del Proceso, impuso a los litigantes la carga de aportar no solo las pruebas que tienen en su poder, sino, además aquellas que puedan obtener directamente o través del ejercicio del derecho de petición; pero dejando la salvedad, que si a pesar de esas gestiones el interesado no puede obtener directamente la prueba, en este caso puede solicitar al juez que la obtenga a través de los medios probatorios previstos.

Frente a la aplicación de la carga dinámica de la prueba, que el recurrente esgrime como argumento, se advierte que no la invocó al momento de solicitar la prueba, como tampoco puso de presente las dificultades para obtenerla; lo que dicho sea de paso, el Tribunal no las advierte; simplemente, la prueba que solicitó y le fue negada, la tenía que obtener directamente, gestión que no realizó y, de contera, no cumplió con el requisito para que fuera decretada por el juez, como viene de precisarse.

De lo anterior se sigue que como no le asiste razón al recurrente, se impone la confirmación del auto recurrido.

Sin costas en esta instancia porque no se causaron.

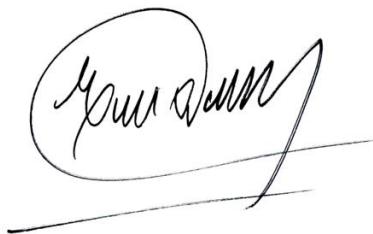
#### **IV. RESOLUCION**

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**,

#### **R E S U E L V E**

- 1.** Por lo dicho en la parte motiva, se confirma el auto de fecha y procedencia indicadas.
- 2.** Sin costas por lo dicho.
- 3.** Se ordena devolver la actuación al Juzgado de origen.

#### **COPIESE Y NOTIFIQUESE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marin', with a long horizontal stroke extending to the right.

**LUIS ENRIQUE GIL MARIN**

**Magistrado**